H. Magistrados
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA
E. S. D.

NICOLAS GUILLERMO ALDANA ZAPATA, mayor de edad, domiciliado en Pamplona, identificado con c.c. 13.350.039 de Pamplona, Abogado en ejercicio con T.P. 48372 del C. S. de la J. actuando como apoderado del señor JEISSON ELDRED NAVARRO SUAREZ, me permito sustentar el recurso de apelación interpuesto en audiencia contra la sentencia, de la siguiente manera:

INCORFOMIDADES CON EL FALLO

“El interrogatorio o declaración de parte tiene por objeto obtener de los demandantes o demandados la versión sobre los hechos relacionados con el proceso, toda vez que suministra certeza al juez sobre la verdad de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda o de las excepciones, y con él se busca formar el convencimiento judicial respecto de la realización de determinados hechos que interesan al proceso, pues constituyen el sustento de las peticiones presentadas por las partes dentro del mismo. Puede llegar a configurar una confesión, siempre y cuando recaiga sobre hechos que perjudican al declarante o favorezcan a la parte contraria y se cumplan los demás requisitos señalados por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil”.¹

No acepta el aquo la confesión hecha por el actor, por cuanto según afirma, no le es perjudicial en nada la declaración rendida bajo juramento. Sin embargo, obvia el despacho reconocer que la confesión realizada por éste, deja claro que hubo varios negocios, que todos estaban saldados y no se valora la prueba documental aportada por parte y parte, en la cual se reflejan hechos contrarios y perjudiciales para el actor, cuales fueron:

Declara el accionante, que fueron varios negocios y para hacer un “negocio nuevo”, el anterior se liquidaba, esto dijo bajo gravedad de juramento: (transcribo)- *aproximadamente en el 2011 se presentó Maurier el hermano solicitó un crédito creo que fue en una construcción en Ocaña en un principio o en Pamplona, se le prestó una plata, se cuadraron intereses después dieron, creo que nos hicieron escrituras de unos apartamentos para poderlos terminar en Pamplona. se liquidó ese negocio, en el 2014 invitaron al dr Jesús María a Ocaña a ver una construcción que estaba haciendo de otro edificio, se le prestó otra plata para los acabados, vendieron los apartamentos liquidamos la deuda-.; mas adelante dijo: - cuando le entregué me dijo que necesitaba 110 más, se los presté los 150 porque . Más adelante dijo: - en el año 2015 se liquidó ese negocio, eso fue un negocio nuevo porque los anteriores ya estaban liquidados-.*

¹ Sentencia C-559/09 Magistrado Ponente: Dr. NILSON PINILLA PINILLA Bogotá, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil nueve (2009).

Y para corroborar y no quedarse con duda alguna, la señora Juez, le preguntó: “O sea, le entiendo de lo que me está diciendo que, de esas operaciones comerciales de esos préstamos que usted le hizo al señor Jeisson y al señor Maurier, no en ese momento sólo al señor Maurier, él no le quedó debiendo absolutamente nada?” Y el señor Carlos respondió: *“Eso estaba liquidada esa cuenta, por eso accedimos a otro crédito, porque nos habían quedado bien en los negocios anteriores”*.

Esta manifestación voluntaria es una CLARA CONFESIÓN del señor Martínez, quien expresa abiertamente y sin ningún tipo de coacción los dos negocios anteriores fueron liquidados, cancelados, y por último en el 2016 se hizo la ficta negociación objeto del presente litigio.

Dicha confesión debe valorarse conjuntamente con los documentos aportados con la contestación de la demanda y las aportadas por el demandado tanto con la demanda como con las excepciones y la prueba testimonial recaudada, no como lo hizo la juez de primera instancia quien solamente valoró la existencia de los pagarés y parcialmente la declaración rendida por el demandante.

En su testimonio el señor Maurier Navarro, testigo fundamental por su participación directa en las negociaciones, confirma los hechos narrados por el demandante, en el sentido que se hizo un crédito en enero del año 2011 y se pagó en su totalidad, por estar a paz y salvo, en agosto del año 2014 les hacen un nuevo crédito, hasta ahí coinciden accionante y testigo, porque difieren en lo ocurrido con este segundo crédito, mientras el primero dice que se pagó en su totalidad y se hizo un nuevo negocio, el segundo manifiesta que a la luz de los intereses legales se pagó el segundo préstamo (año 2014), pero como en la realidad se pagaban intereses del 3.5% mensuales, esa diferencia entre el interés legal y el interés realmente cobrado fue la que se convirtió en capital en el primer pagaré firmado en el 2016 y el cobro de intereses futuros en el segundo pagaré, **dando origen a una negociación simulada**, por cuanto no se recibió dinero en efectivo como lo manifiesta el demandante y lo que se cobra es producto de un rendimiento ilegal del dinero prestado en el año 2014.

Llama poderosamente la atención lo narrado por mi testigo Maurier, cuando menciona que a mediados del año 2015, encontrándose totalmente liquidado el primer préstamo del año 2011, -repito- así lo confirman accionante y testigo, y coinciden además en que es precisamente ésta la razón por la cual se le hizo el segundo préstamo en el 2014, le cobraron a él y a su hermano (demandado) por segunda vez OCHENTA MILLONES DE PESOS en dos partes cada una de CUARENTA MILLONES, por concepto de intereses del crédito del 2011¿?, -repito otra vez- intereses ya liquidados, intereses ya pagados.

Estos \$ 80.000.000,00 forman parte de los pagos realizados a los créditos pendientes de los títulos que hoy se cobran en éste proceso.

Recordemos la confesión del señor Carlos Enrique, *“aproximadamente en el 2011 se presentó Maurier el hermano solicitó un crédito creo que fue en una construcción en Ocaña*

en un principio o en Pamplona, se le prestó una plata, se cuadraron intereses, después dieron creo que nos hicieron escrituras de unos apartamentos para poderlos terminar en Pamplona. Se liquidó ese negocio, en el 2014 invitaron al Dr Jesús María a Ocaña a ver una construcción que estaba haciendo de otro edificio, se le prestó otra plata para los acabados...”, en palabras del declarante Maurier (transcribo), -Nos quitaron OCHENTA MILLONES DE PESOS en dos pagos hechos en los meses de mayo y junio del año 2015 -, y es que no se trata de una simple manifestación, es una VERDAD que toma fuerza al ser cotejada con senda prueba documental que obra al paginario del proceso como anexos del escrito allegado al despacho por el apoderado del demandante el 13 de febrero de 2020 y que son los RECIBOS DE CAJA Nos. 00016789 y 00016821 de fecha 27 de mayo de 2015 y 23 de junio de 2015 respectivamente, cada uno por valor de 40'000.000, vistos a folios 92 y 93, que dan cuenta que el 27 de mayo de 2015 NUEVAMENTE se le cobró intereses a los Hermanos Navarro por mensualidades de mayo a diciembre de 2013 y enero y febrero de 2014 por un supuesto capital de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS y el 23 de junio de 2015, NUEVAMENTE se les cobró intereses por el mismo capital por las mensualidades de febrero a junio de 2015, en total OCHENTA MILLONES DE PESOS, que mi cliente consignó en la cuenta del demandante y se abonaron como se dijo a intereses que ya se habían pagado del primer préstamo del año 2011.

Sí la jueza de primera instancia hubiese hecho una valoración adecuada de la prueba recaudada en el proceso, si se hubiese esforzado un poco por analizar la prueba de una manera más acuciosa para determinar de una forma más concreta los verdaderos hechos ocurridos, se habrían declarado probadas nuestras dos primeras excepciones como se le hizo ver en nuestros alegatos de conclusión, así:

La Usura, por cobrar dos veces intereses al menos en las mensualidades reseñadas en la prueba documental, primero a una tasa del 2.2% mensual, así lo confesó el demandante al responder mi pregunta: *Dígale al despacho cuál ha sido la tasa de interés que han pactado ustedes para los préstamos?* respondió: *Al permitido que ha sido el 2.2 o el 2.4, eso es lo que me acuerdo lo que se ha pactado*, y luego, encontrándose pagado capital e intereses, es decir, liquidada esa cuenta como lo narraron los señores Carlos Martínez y Maurier Navarro, les cobraron NUEVAMENTE a los hermanos-socios, intereses a razón del 2.4% mensual como se prueba con los recibos de caja citados, lo que conlleva a afirmar que sumados los intereses pagados para la misma mensualidad en las fechas anotadas, les hicieron pagar intereses al 4.6% mensuales, tasa muy por encima de la TASA DE USURA para los años referidos.

Aún en la liquidación del crédito, se liquidan los intereses a una tasa superior a la pactada en los pagarés y superior a las ratas establecidas mensualmente por la Superfinanciera Nacional.

Con la prueba documental aludida, aunada a los testimonios, se prueba de manera fehaciente que hubo COBRO DE LO NO DEBIDO o lo que es lo mismo PAGO DE LO NO DEBIDO, no puede haber duda razonable al respecto SE COBRARON Y PAGARON **OCHENTA**

MILLONES DE PESOS, que no se debían, se descontaron abusivamente de consignaciones en cuenta bancaria y se atribuyeron al pago de intereses de un capital que ya se había pagado para el año 2015, fecha de suscripción de los recibos de caja (ver prueba documental folios 92 y 93), recordemos que para hacer el préstamo de agosto de 2014, ya se había pagado el crédito del año 2011, entonces ¿Cómo es posible que en el año 2015 se les cobre intereses supuestamente adeudados de mensualidades del año 2013?, simplemente se COBRA LO NO DEBIDO.

Como si fuera poco, de manera oficiosa la jueza pudo haber dado por probada la excepción de ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, por cuanto con el cobro efectivo de lo no debido, como se probó durante el proceso, se enriqueció el demandante a costa del empobrecimiento de los hermanos NAVARRO SUÁREZ, quienes ven diezmado injustamente su patrimonio en OCHENTA MILLONES DE PESOS.- Obra al paginario prueba documental irrefutable confirmada con la confesión del demandante y el testimonio de Maurier.

Pero muy contrario a lo que muestran las evidencias y lo que de éstas se podía concluir, sin siquiera echar una mirada de soslayo a los documentos existentes, a pesar de haber sido descritos por nuestra parte de manera detallada en los alegatos finales, NO HUBO PRONUNCIAMIENTO ALGUNO AL RESPECTO por la A Quo, sólo se limitó a decir que no se podía tomar la declaración del señor Carlos Enrique como una confesión, puesto que no afectaba sus intereses. ¡POR DIOS!, como se puede motivar una sentencia con tan sesgada manifestación; casi una defensa oficiosa del demandante. El Consejo de Estado ha precisado que: *“No es posible apreciar las declaraciones de alguna de las partes como si se trataran de la versión de los hechos rendida por un tercero imparcial”*.

Tampoco puede tomarse una declaración como confesión, única y exclusivamente si perjudica a quien las hace, también debe ser tomada como confesión cuando simplemente es favorable a su contraparte en ese proceso, aquí se cumplen las dos condiciones.

A la luz de la lógica y el buen juicio, no es posible sostener que no afecta los intereses del demandante CONFESAR que para hacer el crédito del año 2014, ya se había liquidado el primer crédito del año 2011 y sin embargo, la prueba documental obrante demuestra que volvió a cobrar en el año 2015, intereses de las mensualidades del año 2013 que ya se habían pagado, se aprovechó que esos dineros, los OCHENTA MILLONES DE PESOS entregados en dos pagos, fueron consignados en cuenta bancaria y se los atribuyó a intereses ya pagados, como se evidencia con la prueba documental descrita vista a folios 92 y 93. No hay duda que el accionante cobró lo no debido, que se enriqueció sin causa empobreciendo a mi cliente, no sólo lo perjudica en el proceso, sino que lo deja ad portas de una inminente denuncia penal, no es un secreto que las actuaciones del demandante detalladas en las tres excepciones que debieron ser dadas como probadas por la primera instancia, transitan por los senderos del código penal.

Sostiene la A quo que, el demandado no aportó prueba alguna que pudiese ser tomada como indicio a su favor. Y ¿cómo podría mi cliente declarar detalles sobre un negocio que

no hizo de manera directa?, su poca intervención en los negocios que dan origen a los títulos en litigio, quedó totalmente probada. Tal vez pretendía entonces la juzgadora que mi protegido mintiera bajo la gravedad de juramento.

Sí la jueza advirtió la falta de conocimiento al respecto de los hechos por parte de mi cliente, ¿Por qué razón no permitió incluir como demandado al hermano de mi prohijado, al señor Maurier quien sí participó de manera directa en los negocios, ya como sujeto procesal Maurier habría podido aportar pruebas y ejercer su defensa, situación que estaba vedada desde su calidad de testigo.

Tampoco fue para la jueza indicio alguno en contra del demandante que, al recorrer la contestación de demanda, a través de su apoderado reformulara totalmente los hechos y aparecieran claros indicios que la realidad comercial se remontaba al año 2011 y no a un aparente único crédito en el 2016, como se narró en el escrito de demanda. Manifiesta además en su fallo que, se escapa de toda lógica que “comerciantes” como los socios Navarro sean presionados para firmar títulos valores, les endilga la juez a mi cliente y a su hermano la calidad de comerciantes que los mismos declararon no tener, mi cliente Jeisson es Ingeniero industrial dependiente de la empresa Ecopetrol y el hermano Maurier le aclaró que es un ingeniero civil dedicado a la construcción, y en cambio no aplicó su experiencia, el sentido común y las leyes de la lógica tan siquiera para cuestionarse ¿Por qué? sí el demandante confiesa que, para firmar los pagarés en litigio los días 3 y 6 de mayo de 2016 que soportaban una “supuesta” nueva deuda, se encontraban todas las cuentas anteriores saldadas, a paz y salvo por parte de mi cliente y su hermano, **todavía quedaban tres inmuebles hipotecados que fueron liberados inmediatamente el 20 de mayo de 2016**, tan solo 14 días después de firmar los 2 pagarés fueron liberados estos 3 inmuebles, así lo prueban el certificado de cancelación de hipoteca No. 166 del 20 de mayo de 2016, por medio del cual se libera el apartamento 801 del edificio Plazuela Mayor de Pamplona, que se encontraba hipotecado desde el 2011, visto al folio 112 y el certificado de cancelación de hipoteca No. 167 del 20 de mayo de 2016 por medio del cual se liberan los apartamentos 603 y 703 del edificio Bonaire de Ocaña, que se encontraban hipotecados desde el 2014, visto al folio 113, estas son pruebas documentales irrefutables de que aún existían pendientes insolutos que fueron saldados con la firma de los nuevos pagarés, prueba innegable de que no recibieron dinero en efectivo como dicen los títulos que adolecen de falsedad, la verdadera razón para firmar los pagarés es la sostenida por nuestra parte, una exigencia del accionante y su representante, aca apoderado judicial, aprovechándose de su posición dominante frente a la necesidad de los hermanos Navarro de cumplir con los compradores de los 3 inmuebles que para la fecha de suscripción de los pagarés aún se encontraban hipotecados,

El hecho de existir garantías sin cancelar, indica sin temor a equivocarse que existían pendientes insolutos y toma fuerza nuestra versión que coincide con el testigo Maurier, respecto de la presión ejercida para establecer una nueva garantía por la necesidad de liberar los 3 inmuebles para entregarlos a los compradores y así mismo la liberación de otros inmuebles que se dio también el mismo 20 de mayo de 2016, de cuya cancelación de

hipoteca no existe prueba documental en el proceso, sólo testimonial, pero bien pudo corroborarlo la Jueza de primera instancia con un simple oficio a la oficina de instrumentos públicos ya que tenía conocimiento de los números de matrícula inmobiliaria, pues se encuentran en la escritura No. 2187 del 25 de septiembre de 2012, notaría sexta de Cúcuta aportada con la contestación de demanda; y se refuerza aún más nuestra verdad, como lo advertimos en los alegatos de conclusión.

Con la evasiva del demandado a contestar la pregunta hecha por la sentenciadora respecto de la presión ejercida para firmar los pagarés, en dos oportunidades, en la primera ocasión le preguntó: usted ejerció alguna fuerza o violencia sobre el demandado o sobre Maurier para obligarlos a tomar esa determinación de constituir una garantía hipotecaria Don Carlos?, dijo no entender la pregunta, nuevamente le explicó usted señoría el sentido de la pregunta y la reformuló así: En qué condiciones se dio eso, si hubo una exigencia de parte suya, ésa es la pregunta, sí soy clara Don Carlos?, respondió nuevamente con una risa nerviosa: (transcribo) *Le entiendo perfecto, pero me parece extraña la pregunta, porque el señor Maurier me invitó a su casa muy cordialmente allá para el nuevo crédito, lo demás ya estaba saldado*. Esta evasión es un indicio claro en su contra y también una confesión tácita de la presión que ejercieron a los hermanos Navarro, puesto que de no ser así, el señor Carlos hubiese contestado de manera contundente y no con evasivas.

Por lo acaecido en el proceso, podemos afirmar sin caer en error que a la Juzgadora sólo le interesó edificar una sentencia con base en la verdad aparente narrada en la demanda, dejando de lado los verdaderos hechos probados durante el proceso con sendas pruebas documentales, aún cuando se demostró que distan en demasía con el escrito de demanda y nos hallan la razón; cabe aquí traer a colación lo sostenido por el tratadista Parra al respecto: “Las partes no tienen derechos adquiridos sobre la verdad aparente, de tal manera que la investigación oficiosa por parte del juez no vulnera ningún derecho de estas; por el contrario, cuando ejerce sus facultades inquisitivas da a entender, con ese comportamiento, que al Estado, al cual representa, solo le interesa edificar la sentencia con base en la verdad de los hechos. Las partes no tienen derecho sobre la seudo-verdad; aún más, podemos afirmar que, aún contra su querer, tienen derecho a que en el proceso se investigue la verdad” (Parra. 2006. Pp. 197-198).

Verdad que fue probada, -repito-, con la confesión del demandante, el testimonio de Maurier Navarro y las pruebas documentales aquí descritas, vistas a folios 92, 93, 112 y 113; todas legalmente recaudadas. Rogamos a ustedes señores Magistrados, se haga una valoración de la prueba obrante en el proceso, a fin de evitar que sea la administración de justicia, la que sirva de medio para avalar el enriquecimiento sin causa de un individuo que se aprovechó de la necesidad de mi cliente y su hermano, y pudo así disimular su verdadero negocio que no es más que el anatocismo y la usura, con un “supuesto” nuevo y único préstamo como se presentó en los hechos de demanda, acompañado de títulos fictos que adolecen de falsedad.

Confiamos que el Ad quem, hará un estudio sensato y profundo del caso para edificar la verdad real, que se corresponde con el pensamiento contemporáneo de una verdadera administración de justicia y con lo sostenido por el reconocido tratadista Parra, cuando afirma:

“No es serio sostener hoy en día que existe una diferencia entre el proceso civil y penal, con relación al fin de la prueba, ya que en el proceso penal se busca la llamada ‘verdad real’ y en el civil una verdad formal (es decir una no verdad). Ningún ordenamiento jurídico sensato y más precisamente, ninguna jurisdicción lo sería cuando le prometiera a los asociados un proceso donde a pesar de todas las dificultades y desgaste que implica, solo buscaría una verdad formal y en el otro si, la verdad real. Todo lo referente al decreto de pruebas de oficio en materia civil apunta a darnos la razón en este planteamiento (numeral 4 del art. 37, arts, 179 y 180 del C. de P.C., ver capítulo VIII, sobre pruebas de oficio). (Parra. 2006. P.159).

Lo anterior me lleva a solicitar al H. Tribunal se examine bien el asunto en conocimiento, pues como he venido insistiendo, la existencia de los pagarés que acá se cobran, no son producto de una negociación independiente sino que hacen parte de los negocios anteriores suscritos por los Hermanos Navarro.

Hay pagos que no han sido tenidos en cuenta por el actor ni por el despacho, pese a que éste confiesa que los negocios viejos estaban saldados y él mismo aporta los recibos de \$ 80.000.000 dados en pago y que aplicó no a éstos pagarés, sino a los negocios viejos.

El no tener en cuenta estos pagos realizados por el señor MAURIER NAVARRO, terminará generando un nuevo proceso civil para que un juez reconozca a mi mandante, que el actor se enriqueció sin causa y ordene la devolución de dichos dineros.

De acuerdo con lo anterior, me permito solicitar al H. Tribunal se revoque la sentencia proferida por el Juzgado 5 Civil del Circuito de Cúcuta, y se declaren probadas las excepciones propuestas y se ordene el archivo del proceso.

Señora Juez,

NICOLAS GUILLERMO ALDANA ZAPATA
C.C. 13.350.039 de P/na
T.P. 48372 C. S. de la J.